

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020)

Restablecimiento de Derechos.

Radicado 2020-0181.

La Defensora de Familia del Centro Zonal Rafael Uribe Uribe, remitió el expediente a los Jueces de Familia - Reparto para la revisión del proceso, aduciendo la pérdida de competencia de acuerdo con lo preceptuado por el art. 103 de la Ley 1098 de 2006 modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 103. CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE LA DECLARATORIA DE VULNERACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> La autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso podrá modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se proferirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de oposición establecidos para el fallo en el artículo 100 del presente Código, cuando la modificación se genere con posterioridad a dicha actuación.

El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.

Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto motivado, notificado por estado, el cual no es susceptible de recurso alguno.

En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual determinará si procede el

cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.

En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado.

En ningún caso el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento podrá exceder los dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el reintegro del niño, niña o adolescente a su medio familiar.

Cuando la autoridad administrativa supere los términos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la situación jurídica o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin emitir la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situación jurídica en un término no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional hará la remisión al Juez de Familia.

Revisada la normatividad invocada por la Defensora de Familia, se constata que corresponde a los Juzgados de Familia la revisión de las decisiones administrativas proferidas por el Defensor de Familia en los casos previstos en el Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006 modificado por la Ley 1878 de 2018.

De la revisión de la normatividad antes citada, tenemos que la Comisaría de conocimiento no resolvió de fondo la situación jurídica de la adolescente, conforme lo dispuesto en el art. 100 de la Ley 1098 y si bien se ha sobrepasó el término establecido en la ley para resolver la situación presentada, lo cierto es que ALISON MAYERLI HUERTAS, ha alcanzado la

mayoría de edad, en virtud de lo cual resulta inoficioso efectuar el seguimiento de que trata el art. 103 Ibídem, dado que la persona en favor de quien se inició el trámite administrado actualmente no se encuentra cobijada por la Ley de Infancia y Adolescencia, razón suficiente para devolver las diligencias a la Comisaría de origen.

Por lo expuesto en precedencia, el Juzgado Noveno de Familia de Oralidad, Bogotá D. C.,

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR EL CIERRE del proceso de Restablecimiento de Derechos de la NNA ALISON MAYERLI HUERTAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVUELVASE el presente proceso a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Rafael Uribe Uribe, por las razones expuestas en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned above the printed name of the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA, BOGOTÁ
D.C.

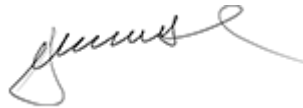
NOTIFICACIÓN POR ESTADO

SECRETARÍA

Bogotá D.C., 3-08-2020

El auto anterior queda notificado a las partes por
anotación en el ESTADO N° 49

Secretaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomas Olaya Gonzalez', with a stylized flourish at the end.

TOMAS OLAYA GONZALEZ